

ORIGEN: SECRETARIA DE EDUCACION/ISABEL SEGOVIA

DESTINO: COMISION 2ª PERM. GOBIERNO/GARZON FANDIÑO DAVID A

ASUNTO: RESPUESTA PROPOSICION 108 DE 2026

OBS: RECIBIDA EL 05-02-2026.

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓNRadicado N° **S-2026-35867**

Fecha: 05-02-2026 - 23:18

Folios: 29 Anexos:

Radicador: LAURA JULIANA PARAMO PEREZ - 1000

Destino: COMISION SEGUNDA DE GOBIERNO PERMANENTE DE GOBIERNO - CONCEJO DE BOGOTÁ

Consulte el estado de su trámite en [www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)opción CONSULTA TRÁMITE  
con el código de verificación:**GKQ2D**

Bogotá, D.C., febrero de 2026

Doctor

**DAVID ANTONIO GARZÓN FANDIÑO**

Subsecretario

Comisión Segunda Permanente de Gobierno

Concejo de Bogotá D.C.

Calle 36 No. 28A - 41

Ciudad

**Asunto:** Respuesta a Proposición 108 de 2026

Radicado SED E-2026-15731

Radicado Concejo 2026EE1203

Estimado doctor Garzón, reciba un cordial saludo.

En atención a la petición relacionada en el asunto, dentro de la competencia de la Secretaría de Educación del Distrito – SED, a continuación se presenta la respuesta a la Proposición 108 de 2026 “Análisis del Memorando No. I-2025-133033 de la Secretaría de Educación del Distrito y su impacto en el Derecho Fundamental a la Educación Efectiva de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad” presentada por la Bancada del Partido Alianza Verde.

## I. Enfoque de Derechos Fundamentales

### 1. ¿Qué estudios técnicos sustentan que la eliminación de las Aulas de Apoyo Pedagógico garantiza el Derecho Fundamental a la Educación Efectiva de los niños, niñas y adolescentes con Discapacidad?

En primer lugar, es importante destacar que, en el marco de las acciones adelantadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, en la administración del alcalde Carlos Fernando Galán; las niñas, los niños y los jóvenes están en el centro de la Política Social, por ello, nuestra apuesta sectorial se enmarca en cuidar el tiempo escolar de las y los estudiantes logrando con esto fortalecer la calidad educativa.

A través de la Ley 1346 de 2009, Colombia ratificó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, comprometiéndose a organizar su sistema educativo bajo los principios de la educación inclusiva, que promueve el acceso, la participación y el aprendizaje de todas las personas, eliminando las barreras que puedan afectar su desarrollo. En este sentido, la Ley 1618 de 2013 y el Decreto 1421 de 2017 establecen las condiciones para garantizar el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad. Sin embargo, la educación inclusiva sigue siendo un reto en nuestro país.

Aunque las personas con discapacidad han ido reconociéndose progresivamente en diferentes espacios de participación, incluida la escuela, en muchos casos, tal como lo han indicado diferentes informes sobre los procesos de inclusión de esta población, siguen privados de crecer en entornos que reflejen la diversidad propia de toda sociedad, permaneciendo en ofertas de

atención educativa y social, especializadas y segregadoras. **La Convención propone un cambio en la forma en que vemos la discapacidad, en donde se transita de un modelo médico y asistencial al modelo social y de derechos humanos.**

Por lo tanto, se debe tener en cuenta la definición de educación inclusiva acorde al Decreto 1421 de 2017, en el que se define como un proceso que garantiza que todos, sin excepción, tengan acceso a oportunidades de aprendizaje de calidad. Esto significa respetar y valorar la diversidad de cada persona, y eliminar cualquier tipo de discriminación en la educación. La educación inclusiva busca que las escuelas y otros lugares de aprendizaje sean espacios **comunes** donde todos se sientan valorados y parte de la comunidad, y donde la diversidad sea considerada una riqueza.

En tal sentido, es importante precisar que, en el Foro de Inclusión y Equidad en la Educación de Cali en 2019, el Gobierno Nacional establece unos compromisos con la UNESCO acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la agenda 2030, donde reconoce la necesidad y la urgencia de proveer una **educación equitativa, inclusiva y de calidad** para todas y todos los estudiantes.

Aun cuando la educación inclusiva trasciende a la población con discapacidad, el foco está puesto en esta población, es así como, el marco normativo sobre la atención educativa para las personas con discapacidad en **Colombia** ha **evolucionado** de un escenario integrador, segregador y exclusivo hacia una educación inclusiva. Esta última se entiende como un proceso transformador que valora y respeta la diversidad, asegurando la participación y el acceso a oportunidades de aprendizaje para todas y todos, independientemente de sus características y condiciones particulares.

Adicionalmente, el artículo **2.3.3.5.2.3.2.** del Decreto 1421 de 2017, establece que la **oferta educativa** para personas con discapacidad corresponde a las entidades territoriales certificadas, siguiendo las orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas emitidas por el Ministerio de Educación Nacional y establece expresamente lo siguiente: 1. Oferta General, 2. Oferta bilingüe bicultural para población con discapacidad, 3. Oferta hospitalaria/domiciliaria y 4. Oferta formación de adultos.

**En la norma citada anteriormente se establece de manera expresa que todos los estudiantes con discapacidad tienen derecho a la oferta educativa general o a la oferta común y contar con los ajustes razonables definidos en el Plan Individual de Ajustes Razonables, adicionalmente, su proceso formativo debe desarrollarse dentro del aula común con los demás estudiantes.**

En este sentido, las y los estudiantes deben participar con compañeros de su misma edad en el aula común, por lo tanto, la Secretaría de Educación del Distrito, en virtud de lo establecido por la norma antes mencionada, **no concibe las instituciones educativas especializadas o de educación especial, que promuevan una atención educativa en aulas con atención personalizada o especializadas**, ni modalidades de atención **de educación especial, segregadoras, integradoras o excluyentes** que condicionen el ejercicio pleno y efectivo del derecho a la educación.

A partir de las acciones adelantadas por la UNESCO y en coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la agenda 2030, diferentes países han transitado hacia un modelo de educación inclusiva. En este sentido, se encuentran estudios cualitativos de análisis comparativo de políticas públicas, como *“Hacia una educación inclusiva, equitativa y de calidad”*, evidencian que la inclusión plena es alcanzable aun en contextos desiguales, siempre que exista liderazgo político, movilización social y una decisión firme de superar los modelos segregadores (Narodowski, Arias, Fernández, & Sacks, 2023).

Este mismo estudio reconoció que Italia cuenta con más de cuarenta años en el ejercicio de la eliminación de escuelas especiales, consolidando apoyos pertinentes que hoy garantizan que casi la totalidad de estudiantes con discapacidad asistan a escuelas regulares (más del 99%). Portugal, con quince años de transformación, avanzó al abandonar la clasificación médica y priorizar la flexibilización curricular y la autonomía escolar, configurando un sistema reconocido internacionalmente, con la participación de más del 88 % de estudiantes con discapacidad en la oferta general. Por su parte, New Brunswick (Canadá) cerró sus instituciones segregadas en apenas tres años a finales de los ochenta, y tras más de tres décadas mantiene un modelo sólido basado en el Diseño Universal para el Aprendizaje.

Brasil, con casi veinticinco años de avances, logró pasar de un 13% de matrícula en escuelas regulares en 1998 a más del 88% en 2020, apoyado en la atención educativa con ajustes y apoyos. Estos casos evidencian que la educación inclusiva, lejos de ser un ideal abstracto, es una política pertinente y sostenible, cuyos beneficios se reflejan en el acceso, la permanencia y la participación social de las personas con discapacidad, siempre que se sostenga en el tiempo con liderazgo político, movilización social y apoyos efectivos.

En Colombia, los avances en educación inclusiva han permitido reconocer a las personas con discapacidad **como sujetos de derechos y orientar la política educativa hacia la remoción de barreras de acceso y participación**. Sin embargo, los retos persisten y requieren de acciones sostenidas que fortalezcan tanto la inclusión social como la productiva. En este sentido, la Fundación Saldarriaga Concha recomienda consolidar indicadores como el Índice Multidimensional de Inclusión Social y Productiva (IMISP-PcD<sup>1</sup>), con el fin de monitorear las brechas y guiar decisiones de política pública que garanticen el bienestar y la igualdad de oportunidades. Dicho índice evidencia que las personas con discapacidad enfrentan mayores niveles de exclusión, especialmente en zonas rurales, lo que refuerza la urgencia de fortalecer la educación inclusiva como vía para cerrar estas desigualdades y avanzar hacia un sistema pertinente, sostenible y equitativo (Fundación Saldarriaga Concha & Inclusión SAS, 2021).

Tanto en el contexto nacional como en la experiencia internacional, la evidencia demuestra que la educación inclusiva es un camino posible y necesario. La Fundación Saldarriaga Concha (2021) advierte la urgencia de cerrar brechas en Colombia mediante el fortalecimiento de políticas y seguimiento a los avances, mientras que el estudio comparativo de la Red Regional por la Educación Inclusiva de Latinoamérica (RREI) y Centro de Evaluación de Políticas basadas en Evidencia (CEPE) confirma que, con liderazgo político y apoyos adecuados, la educación

---

<sup>1</sup> Fundación Saldarriaga Concha, & Inclusión SAS. (2021). Índice multidimensional de inclusión social y productiva para personas con discapacidad: Informe nacional 2021. Bogotá, D.C.: Fundación Saldarriaga Concha. [https://asdown.org/wp-content/uploads/2025/06/INal\\_IMISP\\_PcD\\_2021.pdf](https://asdown.org/wp-content/uploads/2025/06/INal_IMISP_PcD_2021.pdf)

inclusiva puede configurarse como un modelo sostenible y beneficioso para las personas con discapacidad (Narodowski, Arias, Fernández, & Sacks, 2023).

Por otra parte, evidencia nacional e internacional muestra que la interacción con pares en entornos inclusivos es la estrategia más efectiva para el desarrollo integral de las y los estudiantes con discapacidad. Estudios del **Ministerio de Educación Nacional, la UNESCO (Informe GEM 2020) y la UNICEF** demuestran que las niñas, los niños y jóvenes con discapacidad que aprenden junto a sus compañeros sin discapacidad, en aulas comunes/regulares con los apoyos y ajustes necesarios, desarrollan mejores habilidades sociales, mayor autonomía y niveles más altos de logro académico que aquellos que permanecen en entornos segregados. La educación inclusiva, en consecuencia, no invisibiliza las diferencias, sino que promueve el reconocimiento y la valoración de la diversidad como fuente de aprendizaje colectivo y cohesión social.

Teniendo en cuenta el contexto internacional y lo establecido en el Decreto 1421 de 2017, **todas las instituciones educativas distritales**, tanto públicas como privadas, deben garantizar el acceso, la permanencia, la participación y el progreso de la diversidad de estudiantes a lo largo de trayectorias educativas diversas, oportunas y completas en entornos inclusivos, no segregados.

En consonancia con lo anterior, se resalta lo establecido en las circulares 020 y 021 de 2022 del Ministerio de Educación Nacional – MEN, en las cuales se establece el tránsito de la atención de estudiantes con “discapacidad de ofertas segregadas hacia ofertas en el marco de la inclusión y equidad en la educación”.

Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional mediante Sentencia T-051 de 2011 enfatizó el deber que tiene el Estado Colombiano de **pasar de modelos de educación "segregada" o "integrada" a una educación inclusiva** que persigue que "todos los niños y niñas, independientemente de sus necesidades educativas, puedan estudiar y aprender juntos", pues a diferencia de los anteriores modelos, **el objetivo de la educación inclusiva es que "la enseñanza se adapte a los alumnos y no éstos a la enseñanza"**.

2. **¿Cómo asegura la Secretaría que la inclusión en aulas regulares garantice aprendizajes reales y verificables?**
4. **¿Qué medidas se adoptaron para evitar regresividad educativa en estudiantes que ya recibían apoyos efectivos?**
8. **¿Qué ruta se activa cuando un estudiante no logra los aprendizajes efectivos en el aula regular?**

*Por unidad de materia, se presenta la repuesta a los numerales 2, 4 y 8:*

Al respecto, se precisa que, teniendo en cuenta el “Lineamiento para la atención educativa a la población con discapacidad matriculada en el sistema educativo de Bogotá” (SED, 2024), la valoración pedagógica es un proceso sistemático en el cual intervienen diferentes actores de la comunidad educativa y es elaborado por parte de la IED. Además, requiere de diversas fuentes

de información para que los docentes identifiquen las características y necesidades de los estudiantes. Por lo tanto, esta se realiza en ambientes naturales y en actividades específicas en el aula. También incluye documentos como la historia escolar y certificados de discapacidad, así como realizar pruebas de desempeño académico y entrevistas con familias. Esta valoración se convierte en un insumo para la implementación de los ajustes razonables y corresponde al 2 anexo del Plan individual de ajustes razonables. A partir de esta valoración, se plantean los ajustes metodológicos, didácticos, evaluativos y curriculares necesarios para favorecer su participación en el aula. Se han diseñado estrategias y apoyos específicos que responden a sus características particulares, reconociendo su ritmo y estilo de aprendizaje.

De acuerdo con lo mencionado, la Guía de implementación del Decreto 1421 de 2017, el MEN establece que, tras la entrevista inicial con las familias y durante el primer mes de ingreso del estudiante, se debe llevar a cabo una valoración pedagógica. Esta valoración tiene como objetivo identificar los gustos, capacidades y habilidades de los estudiantes, así como sus intereses, motivaciones, expectativas, ritmos y estilos de aprendizaje. Además, permitirá determinar los ajustes razonables y apoyos necesarios para su proceso educativo. Esta valoración es realizada por el docente, quien, según las características de la institución, podrá contar con el apoyo del docente orientador, del coordinador o del docente de apoyo. A partir de los resultados de la valoración pedagógica, se establecerán los ajustes razonables a implementar y se firma el acta de acuerdo con las familias.

Además, el Decreto 1421 de 2017 en el Artículo 2.3.3.5.2.3.5. contempla lo siguiente frente a la construcción e implementación de los Planes individuales de apoyos razonables:

**Artículo 2.3.3.5.2.3.5. Construcción e implementación de los Planes Individuales de apoyos y ajustes razonables (PIAR).** El PIAR se constituye en la herramienta idónea para garantizar la pertinencia del proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante con discapacidad dentro del aula, respetando sus estilos y ritmos de aprendizaje. Es un complemento a las transformaciones realizadas con el Diseño Universal de los Aprendizajes.

El PIAR es el proyecto para el estudiante durante el año académico, que se debe llevar a cabo en la institución y en el aula en conjunto con los demás estudiantes de su clase, y deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: i) descripción del contexto general del estudiante dentro y fuera del establecimiento educativo (hogar, aula, espacios escolares y otros entornos sociales); ii) **valoración pedagógica**; iii) informes de profesionales de la salud que aportan a la definición de los ajustes; iv) objetivos y metas de aprendizaje que se pretenden reforzar; v) ajustes curriculares, didácticos, evaluativos y metodológicos para el año electivo, si se requieren; vi) recursos físicos, tecnológicos y didácticos, necesarios para el proceso de aprendizaje y la participación del estudiante y; vii) proyectos específicos que se requieran realizar en la institución educativa, diferentes a los que ya están programados en el aula, y que incluyan a todos los estudiantes; viii) información sobre alguna otra situación del estudiante que sea relevante en su proceso de aprendizaje y participación y ix) actividades en casa que darán continuidad a diferentes procesos en los tiempos de receso escolar” (Negrillas propias).

**El diseño de los PIAR lo liderarán el o los docentes de aula con el docente de apoyo, la familia y el estudiante.** Según la organización escolar, participarán los directivos docentes y



el orientador. **Se deberá elaborar durante el primer trimestre del año escolar, se actualizará anualmente** y facilitará la entrega pedagógica entre grados. Frente al mismo, el establecimiento educativo deberá hacer los seguimientos periódicos que establezca en el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes existente. Incluirá el total de los ajustes razonables de manera individual y progresiva.

En este sentido, son las instituciones educativas distritales las que elaboran el Plan individual de ajustes razonables, **dentro del primer trimestre del año escolar o en el momento que durante el proceso de atención educativa se requiera**, incluyendo la valoración pedagógica como uno de sus componentes, herramienta que garantiza la pertinencia de los procesos de enseñanza y aprendizaje del estudiante dentro del aula, respetando sus estilos y ritmos de aprendizaje.

Así las cosas, en el marco de la educación inclusiva regulada en el Decreto 1421 de 2017, la atención educativa a estudiantes con discapacidad se debe realizar en aula común, implementando los ajustes metodológicos, didácticos, evaluativos y curriculares necesarios contemplados en el Plan Individual de Ajustes Razonables (que surgen como resultado de la valoración pedagógica), reconociendo su ritmo, estilo de aprendizaje y favoreciendo de esta manera su participación en el aula, fomentando la inclusión y equidad para el estudiante (y no segregando o discriminando a través de colegios o aulas especializadas).

En consecuencia, fortalecer el aula común/regular como escenario legítimo de aprendizaje, con apoyos definidos desde la valoración pedagógica individual, no solo garantiza el derecho a la educación de las personas con discapacidad, sino que contribuye a construir sistemas educativos más justos, cohesionados y capaces de responder a la diversidad de toda la población estudiantil, que promueva sus aprendizajes y participación.

Ahora bien, es importante precisar que, estas son las condiciones necesarias que hoy posibilitan la atención educativa en la oferta general (aula común/regular) del más del 93% de estudiantes con discapacidad y las que están previstas, para favorecer el proceso de tránsito de los estudiantes que están a hoy en la oferta de aulas de apoyo pedagógico, en correspondencia con el marco normativo vigente y las competencias misionales de la Secretaría de Educación del Distrito.

### **3. ¿Qué criterios se usaron para determinar que la medida no vulnera el principio de progresividad del derecho a la educación?**

En su condición de entidad territorial certificada en educación, la Secretaría de Educación del Distrito es la autoridad responsable de la dirección, organización, planeación y prestación del servicio educativo oficial en el Distrito Capital, conforme a lo dispuesto en la Ley 715 de 2001, el Decreto 1075 de 2015 y las normas que regulan el sector educativo. En ejercicio de estas competencias, le corresponde definir la oferta educativa, garantizar la disponibilidad de cupos, administrar el talento humano, organizar los apoyos pedagógicos y de asistencia, y adelantar acciones permanentes de seguimiento y mejora de la calidad educativa.

De manera complementaria, el Decreto 650 de 2025 define la estructura organizacional de la Secretaría de Educación del Distrito y precisa las funciones de sus dependencias, delimitando

los ámbitos de actuación técnica, administrativa y pedagógica que orientan la gestión institucional. En este marco, las acciones asociadas a la educación inclusiva se desarrollan conforme a las competencias asignadas a cada instancia, garantizando una intervención coherente y respetuosa de la organización administrativa, sin desbordar funciones ni sustituir responsabilidades establecidas en la norma.

En desarrollo de estas funciones, la Secretaría tiene la obligación de asegurar que el servicio educativo se preste en condiciones de acceso, permanencia, pertinencia y calidad, con especial atención a las poblaciones con protección constitucional reforzada, como las personas con discapacidad. Para ello, adopta decisiones de carácter técnico y pedagógico orientadas a fortalecer las capacidades institucionales de las instituciones educativas distritales, eliminar barreras para el aprendizaje y la participación, y promover trayectorias educativas completas.

La revisión y transformación de la oferta educativa no constituye una actuación discrecional o aislada, sino una función estructural propia de la autoridad educativa, que se ejerce mediante procesos planificados de acompañamiento, asistencia técnica y articulación interinstitucional. En tal sentido, este proceso no vulnera el derecho a la educación y se sitúa en una reducción de los apoyos; por el contrario, tiene un carácter progresiva, gradual y concertada, en tanto que no existen decisiones unilaterales, ni plazos definitivos ni traslados masivos.

Las decisiones relacionadas con el fortalecimiento del aula común/regular, la reorganización de apoyos y la implementación de ajustes razonables se adoptan con enfoque de derechos y en estricta coherencia con la normatividad nacional vigente.

Estas actuaciones se desarrollan de manera integral dentro de la estructura institucional del nivel central de la Secretaría de Educación del Distrito, así como de las Direcciones Locales de Educación.

En este contexto, los procesos relacionados con la transformación de las aulas de apoyo pedagógico se inscriben en una función legítima de organización del servicio educativo y de mejoramiento continuo de la calidad, orientada a garantizar el derecho a la educación con los apoyos requeridos en cumplimiento de lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente al respecto.

Dichos procesos se desarrollan de manera planificada, gradual y acompañada, con participación de los actores del sistema educativo y bajo los principios de legalidad, corresponsabilidad y protección integral de los derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas.

## **II. Análisis Individual de los Estudiantes**

**5. ¿Se realizó diagnóstico individual e interdisciplinar previo a la decisión?**

**6. ¿Qué instrumentos se usaron para evaluar la idoneidad del aula regular para cada estudiante?**

*Por unidad de materia, se presenta la respuesta a los numerales 5 y 6:*

La Secretaría de Educación del Distrito acompaña a las instituciones educativas distritales en la implementación de medidas que garanticen la continuidad, la calidad y el bienestar de los estudiantes con discapacidad. Este acompañamiento busca asegurar que, durante todo el proceso, ningún estudiante quede desatendido ni se vean vulnerados sus derechos, respetando siempre el ritmo de cada institución educativa y las particularidades de sus estudiantes.

Para esto, se ha diseñado e implementado una ruta de acompañamiento para el tránsito de los estudiantes desde las aulas de apoyo pedagógico hacia las aulas comunes/regulares. Esta ruta está dividida en 4 fases claramente definidas y sustentadas pedagógicamente:

- **Fase 1: acercamiento y exploración**

En esta fase se realiza un reconocimiento de la oferta educativa actual y la trayectoria pedagógica del colegio. Se identifican las características de la comunidad educativa, incluyendo estudiantes, familias y docentes. El objetivo es conocer cómo se organiza actualmente la atención a los estudiantes con discapacidad, cuál ha sido el funcionamiento de las aulas de apoyo pedagógico y cómo se pueden ajustar los procesos para avanzar hacia un modelo inclusivo.

- **Fase 2: caracterización de la oferta y diseño del plan de trabajo**

En esta fase se lleva a cabo una caracterización de la comunidad educativa y de los estudiantes, con el fin de definir un plan de trabajo detallado que permita proyectar el tránsito de manera adecuada. Se realiza un diagnóstico del grupo de estudiantes, su trayectoria educativa, la infraestructura disponible, el talento humano y los recursos que se requieren. Además, se define un cronograma con las acciones necesarias para garantizar el acompañamiento técnico y pedagógico en el proceso de transformación de la oferta educativa.

- **Fase 3: desarrollo del plan de trabajo para el tránsito**

Aquí, se implementan las acciones definidas en el cronograma, asegurando que los estudiantes puedan hacer su transición a las aulas comunes/regulares de manera armoniosa y efectiva. Se realiza un seguimiento constante de los avances de cada estudiante, ajustando las estrategias pedagógicas y apoyos según las necesidades observadas.

- **Fase 4: acompañamiento para la permanencia**

Una vez los estudiantes hayan realizado el tránsito hacia las aulas comunes/regulares, se sigue realizando un acompañamiento continuo para asegurar su permanencia y participación en el aula común/regular. Este acompañamiento incluye el monitoreo de su desarrollo académico y socioemocional, con el objetivo de garantizar que los estudiantes se integren completamente y sigan avanzando en su aprendizaje y participación en la comunidad escolar.

De esta manera, a través de estas fases, la Secretaría de Educación del Distrito se asegura de que los procesos de tránsito hacia un modelo educativo inclusivo se lleven a cabo de manera



planificada, progresiva y respetuosa de los derechos de los estudiantes, con el acompañamiento de las familias y el respaldo pedagógico adecuado.

Además, se está realizando un proceso de acompañamiento integral a las Instituciones Educativas Distritales (IED) para facilitar la acogida de los estudiantes. Este proceso incluye la orientación en la elaboración de Planes de Mejoramiento Institucional (PMI), ajustados a las realidades de cada institución y al comportamiento de la matrícula. A través de estos planes, se busca implementar acciones que fomenten una cultura inclusiva y equitativa, garantizando que todos los estudiantes se sientan valorados y apoyados en su proceso educativo.

Este tránsito debe ser un proceso respetuoso, gradual y concertado, con la participación de las familias y el acompañamiento pedagógico y socioemocional de los estudiantes. En este sentido, la Secretaría de Educación del Distrito reafirma que no existen decisiones unilaterales ni plazos definitivos que puedan afectar a la comunidad educativa ni al derecho a la educación de los estudiantes con discapacidad. Cada caso es evaluado de manera particular y se toman las decisiones necesarias para asegurar el mejor tránsito posible.

La Secretaría de Educación del Distrito reconoce que una transición desarticulada, no planificada o carente de apoyos podría generar afectaciones pedagógicas y socioemocionales en estudiantes con discapacidad; precisamente por ello, el Distrito ha optado por un proceso gradual, acompañado y técnicamente sustentado, que excluye cualquier traslado abrupto, en la vía de la garantía del derecho.

Es preciso reiterar que, **la Secretaría de Educación del Distrito no ha dispuesto traslados masivos, automáticos, ni generalizados de estudiantes con discapacidad desde las aulas de apoyo hacia otras instituciones educativas**. Cualquier decisión relacionada con la ubicación escolar de un estudiante se adopta de manera individual, progresiva y contextualizada, atendiendo a su trayectoria educativa, a las condiciones del establecimiento educativo y a los apoyos requeridos.

En ese sentido, no existe un listado único o predeterminado de instituciones educativas receptoras, dado que los procesos de tránsito desde aulas de apoyo hacia el aula común/regular se desarrollan prioritariamente dentro del mismo establecimiento educativo, cuando las condiciones pedagógicas, organizativas y de apoyos así lo permiten, en coherencia con los principios de educación inclusiva consagrados en el Decreto 1421 de 2017.

Solo de manera excepcional, y previa valoración integral del caso, podría considerarse la reasignación a otra institución educativa. Este escenario no constituye una medida automática y, en todo caso, solo sería viable con la autorización expresa e informada de la familia o acudiente, garantizando el derecho a la participación y a la toma de decisiones libres y conscientes sobre la trayectoria educativa del estudiante.

Además, dicha eventual reasignación requiere:

- Análisis individual del estudiante.
- Diálogo y concertación con la familia.
- Verificación de la disponibilidad de apoyos pedagógicos, comunicativos y de asistencia.

- Articulación entre las direcciones competentes de la SED y los diferentes niveles Central, Local e Institucional.

Por lo anterior, no es posible individualizar instituciones educativas receptoras de manera previa o genérica, en tanto los procesos de tránsito responden a decisiones pedagógicas individualizadas, situadas y concertadas con las familias, orientadas a garantizar el derecho fundamental a la educación en condiciones de igualdad y no discriminación.

### **Condiciones de las instituciones receptoras y capacidad instalada**

En relación con las condiciones de las instituciones educativas y su capacidad instalada, es preciso señalar que no existen instituciones educativas “receptoras” predeterminadas, en la medida en que, como se indicó anteriormente, los procesos de tránsito desde aulas de apoyo hacia el aula común/regular se desarrollan prioritariamente dentro del mismo establecimiento educativo, y no implican, por sí mismos, un traslado a otra institución.

En ese marco, la capacidad instalada se entiende no como un atributo fijo o previo, sino como un conjunto de condiciones pedagógicas, organizativas y de apoyos que se fortalecen de manera progresiva, en función de las necesidades de los estudiantes y de las características de cada institución educativa. Dichas condiciones incluyen, entre otras:

- Disponibilidad y articulación de apoyos pedagógicos, comunicativos y de asistencia, conforme a las necesidades identificadas.
- Implementación de ajustes razonables en los procesos de enseñanza, evaluación y participación.
- Acompañamiento pedagógico a los docentes del aula común/regular.
- Acciones de sensibilización y trabajo colaborativo con la comunidad educativa.
- Seguimiento permanente al aprendizaje y al bienestar del estudiante.

En consecuencia, las instituciones educativas corresponden a instituciones educativas oficiales del Distrito con oferta educativa general en aulas comunes, con disponibilidad de cupos y ubicación territorial que facilita el acceso del estudiante, que ofrezcan los apoyos que requiere cada estudiante para su proceso educativo.

Es importante indicar que, no existe un número máximo de estudiantes con discapacidad por aula, dado que la asignación de cupos no se hace por condición, sino por oferta disponible, garantizando el acceso en igualdad de condiciones.

En los casos excepcionales en los que, previa valoración integral y con autorización expresa de la familia, se considere una reasignación a otra institución educativa, la Secretaría de Educación del Distrito verifica previamente que dicha institución cuente con condiciones mínimas para garantizar la atención educativa, además de la disponibilidad del cupo, tales como:

- Acceso a los apoyos requeridos.
- Condiciones pedagógicas que favorezcan la participación del estudiante.
- Articulación con los equipos de orientación y apoyos correspondientes.

## 7. ¿Cómo se garantiza el interés superior del niño en cada caso concreto?

En primera instancia, es importante aclarar que, la educación inclusiva corresponde a un proceso que trabaja por la garantía del derecho a la educación para todas las personas. Este se fundamenta en los principios de igualdad y pluralidad que consagra nuestra Constitución, esenciales para comprender el sentido de inclusión y equidad en el contexto del Estado social de derecho colombiano. La igualdad ante la ley, recogida en el artículo 13, establece que todas las personas son iguales y prohíbe cualquier forma de discriminación, lo que resulta crucial para asegurar que cada individuo, sin importar sus características o circunstancias, tenga acceso a una educación de calidad. A su vez, la pluralidad del Estado, reconocida en los artículos 7 y 8, subraya la diversidad del país, lo que implica que el sistema educativo debe reflejar y valorar esta riqueza, protegiendo y promoviendo las diversas culturas y contextos de las comunidades.

En este sentido y acorde con la normatividad vigente, las y los estudiantes que se encuentran en la oferta general en el marco de la educación inclusiva, se deben definir e implementar los ajustes razonables, los cuales han sido establecidos en el numeral 4 del artículo 2.3.3.5.1.4 del Decreto 1421 de 2017, en los siguientes términos:

“[...] las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones necesarias y adecuadas del sistema educativo y la gestión escolar, basadas en necesidades específicas de cada estudiante, [...] y que se ponen en marcha tras una rigurosa evaluación de las características del estudiante con discapacidad. A través de estas se garantiza que estos estudiantes puedan desenvolverse con la máxima autonomía en los entornos en los que se encuentran, y así poder garantizar su desarrollo, aprendizaje y participación, para la equiparación de oportunidades y la garantía efectiva de los derechos”.

Es importante mencionar que, para realizar los ajustes razonables, se debe avanzar de manera previa con la valoración pedagógica, de donde surge el Plan individual de ajustes razonables, y que no determina la asignación de un cupo escolar en alguna institución educativa distrital específica, es decir, de la valoración pedagógica no depende asignar un cupo escolar en un determinado colegio, lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.3.3.5.2.3.2, numeral 1 (Oferta General), del Decreto 1421 de 2017.

Ahora bien, para los estudiantes que se encuentran en el aula de apoyo, estos deben transitar a una educación inclusiva, que responda a sus particularidades, con un currículo y procesos evaluativos claros y acordes a sus realidades. Es importante resaltar que este tránsito no se realiza de manera inmediata ni generalizada, sino de forma gradual y planificada, siempre con el objetivo de priorizar el beneficio y desarrollo académico de cada estudiante. Cada caso es evaluado individualmente para identificar sus necesidades, los apoyos requeridos y la mejor manera de garantizar su permanencia y aprendizaje. En este proceso se escucha activamente a las familias, se protegen los derechos de los estudiantes y se asegura que los docentes, con la formación y experiencia necesaria, acompañen este tránsito.

Para lograr esto, la Secretaría de Educación del Distrito acompaña a las instituciones educativas distritales en la implementación de medidas que garanticen la continuidad, la calidad y el bienestar de los estudiantes con discapacidad. Este acompañamiento busca asegurar que,

durante todo el proceso, ningún estudiante quede desatendido ni se vean vulnerados sus derechos, respetando siempre el ritmo de cada institución educativa y las particularidades de sus estudiantes.

## **9. ¿Existe mecanismo de reversibilidad de la decisión?**

Desde la perspectiva normativa, técnica y jurídica que orienta las actuaciones de la Secretaría de Educación del Distrito, no existe un mecanismo de “reversibilidad” respecto al tránsito de estudiantes desde las aulas de apoyo pedagógico hacia las aulas comunes, por cuanto este tránsito no corresponde a una decisión discrecional, sino al cumplimiento obligatorio de un mandato legal y constitucional que ordena a las entidades territoriales eliminar ofertas segregadas y garantizar la educación inclusiva en el aula común.

El Decreto 1421 de 2017 establece de manera expresa que todos los estudiantes con discapacidad deben recibir su atención educativa en el aula común, con los ajustes razonables y apoyos según sus particularidades. En consecuencia, la permanencia de estudiantes en ofertas segregadas como las aulas de apoyo pedagógico no es jurídicamente procedente, y por ello no resulta posible establecer mecanismos que permitan revertir un proceso que deriva directamente del cumplimiento del marco normativo vigente.

Este carácter no reversible también ha sido reafirmado por decisiones judiciales recientes. Por ejemplo, el fallo de la tutela 2025-00332 determinó que ordenar la permanencia de estudiantes en aulas segregadas implicaría forzar a la administración a actuar contra el ordenamiento jurídico vigente, destacando que la educación inclusiva exige la eliminación de dispositivos segregadores y la adaptación del currículo en el aula común.

Asimismo, la existencia de aulas de apoyo no constituye una oferta educativa ni alternativa reconocida por la normatividad, y su paulatina transformación no es optativa, sino un proceso progresivo y obligatorio conforme a las Circulares 020 y 021 de 2022 del Ministerio de Educación Nacional, el Decreto 1421 de 2017, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los compromisos del gobierno nacional con la UNESCO.

No obstante, lo anterior, aunque no existe reversibilidad, sí existe un proceso de acompañamiento continuo, técnico y pedagógico, que incluye:

- Seguimiento uno a uno de los estudiantes.
- Acompañamiento a la construcción del PIAR, desde el reconocimiento de los apoyos y ajustes razonables
- Acompañamiento docente y fortalecimiento institucional.
- Espacio de participación de las familias.

Este acompañamiento garantiza que la transición sea gradual, respetuosa, planificada y centrada en el interés superior del estudiante, pero no implica volver a una modalidad segregada, pues dicha modalidad no hace parte de la oferta educativa permitida en Colombia.

## 10. ¿Cómo se documenta el impacto caso a caso en los 12 colegios con Aulas de Apoyo?

La Secretaría de Educación del Distrito tiene en el centro de este proceso a las y los estudiantes, es así como el desarrollo de la ruta de acompañamiento al tránsito tiene en cada una de sus fases acciones para la caracterización, proyección pedagógica y seguimiento para la permanencia, tal como ya se ha informado anteriormente, esto se desarrolla bajo los lineamientos del Decreto 1421 de 2017 y las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional, y se sustenta en información técnica, pedagógica y administrativa recogida directamente en cada institución educativa, para cada estudiante.

Es de reiterar que, la Secretaría de Educación del Distrito reconoce que una transición desarticulada, no planificada o carente de apoyos podría generar afectaciones pedagógicas y socioemocionales en estudiantes con discapacidad; precisamente por ello, el Distrito ha optado por un proceso gradual, acompañado y técnicamente sustentado, que excluye cualquier traslado abrupto, en la vía de la garantía del derecho

### III. Planes Individuales de Ajustes Razonables

#### 11. ¿Qué estándares mínimos se fijaron para los Planes Individuales de Ajustes Razonables?

#### 12. ¿Cómo se evita que los Planes Individuales de Ajustes Razonables sean meramente formales?

#### 13. ¿Qué mecanismos evalúan el impacto real de los ajustes razonables?

#### 14. ¿Con qué periodicidad se actualizan los Planes Individuales de Ajustes Razonables?

*Por unidad de materia, se presenta la respuesta a los numerales 11, 12, 13 y 14:*

Dentro de las acciones adelantadas por la Secretaría de Educación del Distrito, desde el Decreto 1421 de 2017 y según la guía de diligenciamiento del plan individual de ajustes razonables, se trabaja de manera articulada con los docentes, reconociendo el Plan individual de ajustes razonables (PIAR) como una herramienta pedagógica viva, concebida y desarrollada para orientar el quehacer cotidiano del aula y no como un mero requisito documental.

En este sentido, no es la Secretaría la que define los mínimos de este instrumento, sino que es lo determinado en el Decreto 1421 del 2017, orientando y acompañando a las Instituciones Educativas Distritales para que elaboren el Plan individual de ajustes razonables, **dentro del primer trimestre del año escolar o en el momento que durante el proceso de atención educativa se requiera**, incluyendo la valoración pedagógica como uno de sus componentes, herramienta que garantiza la pertinencia de los procesos de enseñanza y aprendizaje del estudiante dentro del aula, respetando sus estilos y ritmos de aprendizaje.

El diseño y desarrollo del PIAR contempla fases claramente definidas, que parten de una valoración pedagógica integral, orientada a conocer al estudiante, identificar sus habilidades,

capacidades y potencialidades, así como las barreras para el aprendizaje y la participación. Este proceso incluye la flexibilización curricular, la definición de ajustes razonables, la evaluación y la participación de los actores involucrados, evitando que el enfoque se limite exclusivamente a procesos diagnósticos de carácter clínico.

En este marco, los ajustes razonables se implementan efectivamente en la planeación de aula, la metodología, las estrategias pedagógicas y los procesos de evaluación, lo cual se evidencia en las prácticas pedagógicas desarrolladas por el docente de aula. Asimismo, se promueve la corresponsabilidad entre docentes de aula, docentes de apoyo, orientadores escolares y directivos docentes, evitando que la formulación y ejecución del PIAR recaiga en un único actor, esto evita que sean documentos formales y pone a los estudiantes en el centro de los procesos pedagógicos.

En cuanto a la evaluación de los ajustes razonable, el impacto real se evalúa mediante el proceso pedagógicos en el marco del Decreto 1421 de 2017, en este sentido, dentro del Anexo 2 del PIAR, se contempla un apartado de seguimiento, el cual permite realizar un seguimiento constante a los ajustes razonables que se están implementado, este acompañamiento se realiza de manera periódica para identificar acciones de mejorar y garantizar el proceso pedagógico del estudiante. Adicional a ello, en el anexo 2 también se contempla la valoración pedagógica que es un insumo fundamental para la implementación de ajustes razonables instrumento principal para identificar, definir y evaluar los ajustes requeridos por cada estudiante; su diseño, liderado por el docente de aula con la participación del docente de apoyo, la familia y el propio estudiante, permite establecer metas, apoyos, recursos y criterios de seguimiento que son actualizados de acuerdo con las realidades del estudiante. En este sentido, se debe tener claridad que el PIAR es un documento vivo que permite documentar los avances, las barreras que persisten y la pertinencia de los ajustes implementados, permitiendo valorar de manera directa el impacto sobre el aprendizaje, la participación y la autonomía.

Adicionalmente, los docentes de apoyo pedagógico realizan acompañamiento continuo a los docentes de aula, orientando la implementación de ajustes razonables, la flexibilización curricular y el uso de estrategias basadas en el Diseño universal para el aprendizaje (DUA). Este acompañamiento incluye observaciones pedagógicas, asesoría en prácticas inclusivas, seguimiento sistemático a los avances de los estudiantes y reportes periódicos que permiten analizar la efectividad de los ajustes aplicados en el aula común/regular.

#### **IV. Apoyos Especializados**

- 15. ¿Cuántos profesionales de apoyo especializado existen actualmente en los 12 colegios?**
- 16. ¿Cómo será la redistribución de estos apoyos en aulas regulares?**
- 17. ¿Qué proporción estudiante–profesional de apoyo se garantiza?**
- 18. ¿Cómo se asegura continuidad del acompañamiento especializado?**



*Por unidad de materia, se presenta la respuesta a los numerales 15, 16, 17 y 18:*

Es importante precisar que, la Secretaría de Educación del Distrito cuenta con un sistema de apoyos orientado a garantizar el acceso, la permanencia y la participación de las y los estudiantes con discapacidad en el sistema educativo. Un sistema de apoyos es el conjunto de personas que articulan estrategias y acciones para que un estudiante con discapacidad pueda aprender, participar y permanecer en el colegio en igualdad de condiciones, junto a sus compañeros.

Es importante resaltar que, dicho sistema de apoyos está destinado exclusivamente a las instituciones educativas distritales, y que los apoyos humanos asignados no son de carácter exclusivo ni individual para cada estudiante.

El sistema de apoyos de la Secretaría de Educación del Distrito se asigna de acuerdo con las necesidades de apoyo de los estudiantes con discapacidad en las 412 Instituciones Educativas Distritales, garantizando la disponibilidad de recursos pedagógicos, comunicativos y de asistencia en coherencia con el modelo de educación inclusiva.

En este sentido, para la vigencia 2026 se realizó un **aumento** en la dotación del sistema, alcanzando una mayor cobertura de apoyos, con 245 auxiliares de enfermería (20 % más con relación al 2025), 232 mediadores pedagógicos (60 % más con relación al 2025) y 75 intérpretes de Lengua de Señas Colombiana (5 intérpretes adicionales), manteniendo la continuidad de los 1.123 docentes de apoyo pedagógico<sup>2</sup>, así como de los modelos lingüísticos y guías intérpretes, lo que permitirá seguir consolidando la capacidad institucional, ampliar la atención en el aula común/regular y garantizar la continuidad y calidad del derecho a la educación de las y los estudiantes con discapacidad con más de 1.680 apoyos.

**Tabla 1. Detalle de apoyo en los 12 Colegios con aulas de apoyo**

Localidad	Establecimiento educativo	Docentes de apoyo pedagógico	Auxiliares de enfermería	Mediadores pedagógicos	Nº. Total de apoyos en la IED
Engativá	Colegio Bolivia (IED)	42	2	3	<b>47</b>
Kennedy	Colegio Carlos Arturo Torres (IED)	21	1	0	<b>22</b>
Puente Aranda	Colegio Julio Garavito Armero (IED)	12	1	1	<b>14</b>
Kennedy	Colegio Las Américas (IED)	24	4	0	<b>28</b>
Bosa	Colegio Nuevo Chile (IED)	7	3	2	<b>12</b>
Los Mártires	Colegio República Bolivariana De Venezuela (IED)	17	3	0	<b>20</b>
Engativá	Colegio República de China (IED)	10	2	10	<b>22</b>
Usme	Colegio Usminia (IED)	5	1	0	<b>6</b>

<sup>2</sup> Para la vigencia del 2026, se están realizando mesas técnicas en el marco del inicio del año escolar y comportamiento de la matrícula.

Localidad	Establecimiento educativo	Docentes de apoyo pedagógico	Auxiliares de enfermería	Mediadores pedagógicos	Nº. Total de apoyos en la IED
Fontibón	Colegio Villemar El Carmen (IED)	15	2	0	17
Los Mártires	Colegio Panamericano (IED)	3	0	0	3
Barrios Unidos	Colegio Juan Francisco Berbeo (IED)	23	0	0	23
Rafael Uribe Uribe	Colegio Gustavo Restrepo (IED)	61	2	0	63
<b>TOTAL</b>		<b>240</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>277</b>

Fuente: Elaboración propia DIIP -SED

Acorde con lo anterior, **se destacan los docentes de apoyo pedagógico**, cuyo rol es fundamental en la transformación de las prácticas, culturas y políticas inclusivas en las instituciones educativas distritales, en tanto sus funciones se orientan a fortalecer los procesos, a través de:

- Acompañar a los docentes de aula en la valoración pedagógica de estudiantes con discapacidad y en la construcción de Plan individual de ajustes razonables.
- Orientar la planeación pedagógica y el Plan de mejoramiento institucional con perspectiva inclusiva.
- Promover la eliminación de barreras y garantizar la igualdad de oportunidades en el aula.
- Fortalecer el trabajo con familias, redes comunitarias e intersectoriales.
- Apoyar la revisión de manuales de convivencia y sistemas de evaluación escolar.
- A través de este recurso humano idóneo y cualificado, se ha posibilitado adelantar los procesos de formación y de sensibilización docente, que se traduzca en transformaciones pedagógicas, curriculares e institucionales que consolidan culturas inclusivas en las instituciones educativas distritales.

Frente a la proporción estudiante - profesional se aclara que y al rol del docente de apoyo pedagógico, se precisa que su función **no corresponde a la prestación de un servicio médico ni al acompañamiento terapéutico y por ende, dicho apoyo no es individualizado**, sino que se orienta al fortalecimiento de los procesos pedagógicos y educativos de los estudiantes con discapacidad, en concordancia con lo establecido en el Decreto 1421 de 2017.

#### 19. ¿Qué criterios definen la intensidad del apoyo por estudiante?

#### 20. ¿Cómo se evita la dilución de los apoyos especializados?

*Por unidad de materia, se presenta la respuesta a los numerales 19 y 20:*

La intensidad del apoyo para los estudiantes se define a partir de la valoración pedagógica que permiten identificar las barreras específicas que enfrenta los estudiantes, junto con los ajustes requeridos para garantizar su acceso, permanencia, participación y aprendizaje en el aula común/regular, conforme a lo establecido en el Decreto 1421 de 2017. Estos apoyos no se

asignan de manera uniforme, sino que responden a una lectura contextualizada de las características del estudiante, de sus metas pedagógicas y del análisis de las interacciones con su entorno escolar. Asimismo, la intensidad se determina en función de la necesidad de asegurar continuidad en los procesos, evitar regresividad en los derechos y mantener coherencia pedagógica, especialmente durante los periodos de tránsito escolar.

En ese sentido, es importante destacar que no se presenta dilución de los apoyos, pues el sistema de apoyos está diseñado para garantizar su continuidad y articulación, y no para fragmentarlos o dispersarlos. Esto se evidencia en que los docentes de aulas de apoyo pedagógico —quienes forman parte integral del proceso— también realizan el tránsito con los y las estudiantes, asegurando que los procesos iniciados no se interrumpan y que los apoyos continúen con la misma finalidad y enfoque pedagógico. Este acompañamiento sostiene la progresión de los aprendizajes y preserva el impacto de las estrategias pedagógicas, de manera que los apoyos mantienen su consistencia técnica y su propósito inicial de eliminar barreras, sin convertirse en servicios paralelos ni en prácticas segregadas.

Además, el fortalecimiento progresivo del sistema de apoyos garantiza que estos se mantengan articulados entre los docentes de aula regular, los docentes de apoyo pedagógico, auxiliares de enfermería y apoyos pedagógicos y comunicativos (intérpretes de LSC, mediadores pedagógicos y comunicativos, modelos lingüísticos y guías interpretes), configurando una respuesta educativa ajustada a las necesidades reales de los estudiantes. En consecuencia, la continuidad del talento humano, la coordinación pedagógica y la actuación conforme al marco normativo vigente aseguran que los apoyos no se diluyan, sino que se sostengan y se fortalezcan como mecanismos efectivos de educación inclusiva y garantía plena del derecho fundamental a la educación, tal como se evidencia el aumento significativo de los apoyos para el 2026, adicional a ello, se aclara que los apoyos no son individualizados o exclusivos para los estudiantes y rol fundamental se enmarca en acciones pedagógicas y se aleja de acción de tipo “terapéutico”.

## V. ASPECTOS PRESUPUESTALES

### 21. ¿Cuál es el presupuesto actual asignado a las Aulas de Apoyo Pedagógico?

### 22. ¿Cómo se redistribuirán esos recursos tras el Memorando?

*Por unidad de materia, se presenta la respuesta a los numerales 21 y 22:*

En la siguiente tabla se presenta el presupuesto asignado para la vigencia 2026, correspondiente a la nómina de los docentes destinados a la atención de las Aulas de apoyo pedagógico (AAP).

**Tabla 2. Costo personal docente AAP, 2026**

Localidad	Institución	Cantidad docentes	Recurso
Barrios Unidos	COLEGIO JUAN FRANCISCO BERBEO (IED)	20	1.749.966.400
Bosa	COLEGIO NUEVO CHILE (IED)	7	514.696.000
Engativá	COLEGIO REPUBLICA DE BOLIVIA (IED)	40	3.499.932.800
Engativá	COLEGIO REPUBLICA DE CHINA (IED)	11	1.132.331.200

Localidad	Institución	Cantidad docentes	Recurso
Fontibón	COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN (IED)	15	1.132.331.200
Kennedy	COLEGIO CARLOS ARTURO TORRES (IED)	22	1.852.905.600
Kennedy	COLEGIO LAS AMERICAS (IED)	21	1.955.844.800
Los Mártires	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	3	308.817.600
Los Mártires	COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (IED)	15	1.029.392.000
Puente Aranda	COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO (IED)	12	926.452.800
Rafael Uribe Uribe	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (IED)	58	5.352.838.400
Usme	COLEGIO USMINIA (IED)	4	205.878.400
<b>TOTAL</b>		<b>228</b>	<b>19.661.387.200</b>

Fuente: Dirección de Talento Humano.

Por otro lado, es preciso aclarar que el Memorando Interno I-2025-133033 no ordena el retiro, traslado ni exclusión de ningún estudiante, ni dispone el cierre de cupos escolares existentes, tampoco señala redistribución de recursos. Por el contrario, dicho memorando reitera a las instituciones educativas distritales la obligación de garantizar la continuidad y estabilidad educativa de los estudiantes con discapacidad actualmente matriculados, así como de fortalecer las prácticas pedagógicas inclusivas, en coherencia con el Decreto 1421 de 2017 y las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional.

La instrucción contenida en el memorando se limita a señalar que no se abrirán nuevos cupos ni se autorizarán traslados hacia aulas de apoyo pedagógico, en el marco del proceso de revisión y transformación progresiva de ofertas segregadas, lo cual no afecta en modo alguno la permanencia de los estudiantes ya matriculados. En este sentido, no existe necesidad de redistribuir presupuestos o restablecer cupos, toda vez que ningún cupo ha sido suprimido.

La Secretaría de Educación del Distrito ha garantizado en todo momento la continuidad del servicio educativo y la atención pedagógica de los estudiantes con discapacidad, incluyendo la valoración de sus procesos educativos y la definición concertada de la mejor oferta para cada caso, sin plazos impuestos que puedan afectar el derecho fundamental a la educación. Adicionalmente, desde la perspectiva de la gestión de la cobertura educativa, la garantía de matrícula para la vigencia 2026 se encuentra plenamente asegurada, conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 1587 de 2025, que regula el proceso de gestión de la cobertura educativa en el Distrito Capital.

De acuerdo con la información verificada en el Sistema integrado de matrícula (SIMAT), todos los estudiantes antiguos cuentan con cupo garantizado para 2026, priorizando la continuidad de sus trayectorias educativas y, de manera especial, la permanencia de aquellos que pertenecen a poblaciones con especial protección constitucional, como las personas con discapacidad.

Las decisiones adoptadas por la Secretaría de Educación del Distrito no han implicado la eliminación de cupos ni la supresión del servicio educativo, sino la organización y cualificación de la oferta educativa, conforme a criterios técnicos, pedagógicos y de capacidad institucional, en ejercicio de las competencias que le asignan la Ley 715 de 2001, el Decreto 1075 de 2015, el Decreto 310 de 2022 y la Resolución No. 1587 de 2025. En este marco, corresponde a la

Secretaría —y no a las instituciones educativas distritales de manera autónoma— la consolidación y aprobación definitiva de la oferta educativa y la asignación de cupos escolares.

Desde el punto de vista normativo, el Decreto 1421 de 2017 establece que las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a la oferta educativa existente, preferiblemente cercana a su lugar de residencia, en ambientes escolares comunes, con estudiantes de su misma edad, y a recibir los apoyos y ajustes razonables que requieran, prohibiendo la adopción de modalidades segregadas como condición de atención educativa. En coherencia con ello, las Circulares 020 y 021 de 2022 del Ministerio de Educación Nacional ordenan a las entidades territoriales certificadas avanzar en la transformación de ofertas segregadas hacia modelos inclusivos, eliminando barreras de acceso y permanencia y garantizando la integración de los estudiantes con discapacidad en la oferta regular con los apoyos pertinentes.

**23. ¿Existe apropiación presupuestal específica para el nuevo modelo?**

**24. ¿Qué rubros financian los ajustes razonables requeridos?**

**25. ¿Cuál es el impacto presupuestal de eliminar las Aulas de Apoyo?**

**26. ¿Cómo se garantiza la sostenibilidad financiera del modelo?**

*Por unidad de materia, se presenta la respuesta a los numerales 23, 24, 25 y 26:*

Desde el punto de vista técnico, presupuestal y jurídico, es importante precisar que, el proceso que adelanta la Secretaría de Educación del Distrito en materia de educación inclusiva no corresponde a la implementación de un nuevo modelo que requiera una apropiación presupuestal específica, ni a una reforma presupuestal que implique la creación, eliminación o sustitución de líneas de gasto existentes.

En la actualidad, no existe una apropiación presupuestal autónoma ni diferenciada asociada a este proceso. Las acciones que se desarrollan se enmarcan en las competencias misionales del sector educación y se gestionan con cargo a los proyectos, programas y recursos ya existentes, tanto de inversión como de funcionamiento, orientados a garantizar el derecho a la educación de los estudiantes con discapacidad.

En este mismo sentido, los ajustes razonables no constituyen un rubro presupuestal independiente ni una fuente específica de financiación, dado que su naturaleza es individual, situada y casuística. Los ajustes razonables no operan como un programa financiable en bloque, sino como obligaciones que se materializan, cuando es necesario, a través de decisiones pedagógicas, organizativas y metodológicas que en muchos casos no implican costos adicionales, y en otros se atienden de manera complementaria mediante componentes ya existentes del presupuesto educativo, como apoyos pedagógicos, comunicativos o de asistencia, bienes y servicios disponibles, y acciones de acompañamiento institucional.

Respecto a las Aulas de apoyo, no se está adelantando un proceso de eliminación administrativa ni presupuestal de esta oferta, por lo cual no se identifica un impacto presupuestal directo, ni en

términos de ahorro ni de incremento del gasto. Lo que se desarrolla es un análisis pedagógico progresivo orientado a fortalecer la atención educativa en el aula común, sin cierres automáticos, sin supresión de recursos y garantizando la continuidad del servicio educativo y los derechos de los estudiantes.

La sostenibilidad financiera del proceso se garantiza en la medida en que no se crean nuevas obligaciones fiscales, sino que se optimiza el uso de los recursos existentes, se fortalecen las capacidades institucionales y pedagógicas, y se incorporan criterios técnicos de planeación, seguimiento y priorización. Este enfoque permite que las acciones se desarrollen dentro del marco presupuestal vigente, asegurando continuidad, gradualidad y responsabilidad fiscal, sin comprometer la estabilidad financiera del sector.

## **VI. Indicadores y Evaluación**

**27. ¿Qué indicadores de Educación Efectiva se usarán para evaluar la medida?**

**28. ¿Cómo se medirá el aprendizaje real de los estudiantes?**

**29. ¿Qué indicadores medirán la calidad del apoyo especializado?**

**30. ¿Cómo se identificarán retrocesos educativos?**

**31. ¿Cómo se medirá el impacto emocional y social en los estudiantes?**

## **VII. Impactos Negativos Potenciales**

**32. ¿Qué análisis de riesgos se realizó frente a retrocesos en aprendizajes?**

**33. ¿Qué medidas previenen la deserción escolar encubierta?**

**34. ¿Cómo se previene el fracaso escolar de estudiantes con mayores necesidades?**

**35. ¿Qué acciones se tomarán frente a afectaciones emocionales y psicológicas?**

**36. ¿Cómo se protegerá a los estudiantes de discriminación en aulas regulares?**

*Por unidad de materia, se presenta la respuesta a los numerales 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36:*

La evaluación y el seguimiento de la educación inclusiva en el Distrito se fundamentan en un robusto marco técnico y normativo que prioriza el acceso, la permanencia, la participación y el progreso de los estudiantes dentro de trayectorias educativas completas. Bajo el amparo de la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1421 de 2017, el éxito de estas medidas se mide a través del monitoreo sistemático del reporte de matrícula en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), herramienta que permite verificar la vinculación efectiva de la población con discapacidad en las diversas ofertas educativas, tales como la general, bilingüe bicultural, hospitalaria y de adultos.



Así también, la *“medición del aprendizaje”* trasciende la evaluación estandarizada para centrarse en una valoración pedagógica, continua y situada, la cual enruta la elaboración e implementación de un Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR). Este no solo constituye un requisito técnico-normativo obligatorio, sino que funge como la herramienta pedagógica fundamental para la identificación y superación de las barreras para el aprendizaje y la participación. Mediante este instrumento, se garantiza la adaptación efectiva del currículo, la pertinencia de los apoyos y la flexibilización de los sistemas de evaluación, ajustándolos a las necesidades de cada estudiante.

Este proceso de valoración, liderado por los docentes de aula en articulación directa con los docentes de apoyo, permite determinar con precisión las metas de aprendizaje, el desarrollo de competencias y los progresos reales, asegurando que la respuesta educativa sea coherente con las capacidades y el proyecto de vida de cada estudiante.

Respecto a *“la calidad y suficiencia del apoyo especializado”*, el Distrito garantiza una respuesta institucional robusta mediante indicadores de capacidad instalada que, para la vigencia 2026, se materializan en un equipo interdisciplinario de más de 1.680 perfiles profesionales. Este talento humano, compuesto por 1.123 docentes de apoyo pedagógico, 245 auxiliares de enfermería, 232 mediadores pedagógicos y 75 intérpretes de Lengua de Señas Colombiana (LSC), se rige estrictamente por criterios de pertinencia pedagógica y accesibilidad universal.

En cuanto a *“la detección de retrocesos educativos”*, la Secretaría de Educación ha diseñado una ruta de acompañamiento rigurosa que trasciende la simple observación; esta integra fases de caracterización de trayectorias y el uso de alertas tempranas del Observatorio de Acceso y Permanencia. Este mecanismo de monitoreo permite detectar de manera anticipada cualquier riesgo de desescolarización, facultando a las instituciones para ejecutar ajustes inmediatos en sus Planes de Mejoramiento Institucional (PMI) y garantizar la continuidad del proceso formativo sin detrimento de la calidad.

Ahora, el impacto emocional y social se evalúa bajo el principio técnico y científico de que la interacción con pares en entornos regulares constituye la estrategia de mayor eficacia para el desarrollo de la autonomía y el sentido de pertenencia. El bienestar integral del estudiante se monitorea sistemáticamente a través de la consolidación de redes de apoyo, el fortalecimiento del vínculo vinculante familia-escuela y la estructuración de comunidades educativas inclusivas, donde la diversidad no es solo reconocida, sino valorada como un activo pedagógico que potencia el aprendizaje colectivo y la cohesión social.

Adicionalmente, se resalta que, la SED realiza un monitoreo permanente del clima escolar y factores de riesgo a través del Sistema de alertas, una plataforma informática que permite a los colegios del Distrito (tanto públicos como privados) reportar y realizar seguimiento a los eventos o situaciones de presunta vulneración de los derechos de las niñas, niños y jóvenes que se presentan en el interior de los colegios o fuera de estos, ya sea en el contexto familiar, social, virtual o en el entorno educativo.

Las situaciones se clasifican de acuerdo con los siguientes módulos: 1) abuso y violencia, 2) embarazo en etapa escolar, 3) accidentalidad, 4) trastorno de aprendizaje, 5) consumo de sustancias psicoactivas (SPA), y 6) conducta suicida.

Los datos recopilados por el Sistema de alertas son analizados por el Observatorio de convivencia escolar (OBCE), un espacio de investigación, información, análisis y reflexión pedagógica sobre dinámicas y temas relacionados con la convivencia, protección y seguridad escolar del Distrito Capital. A través del OBCE se generan boletines e informes que permiten identificar tendencias, patrones y focos de atención, sirviendo como insumo clave para la actualización y el direccionamiento de las estrategias de promoción de la convivencia y prevención de violencias. De esta manera, la SED fortalece las acciones hacia la determinación y toma de decisiones sobre las posibles afectaciones que se presentan a nivel general en las instituciones educativas sobre el clima escolar para el bienestar integral de los estudiantes a través del monitoreo de situaciones reportadas y el análisis de datos sobre la convivencia escolar.

Por otra parte, en términos de prevención, como se menciona anteriormente, la SED lidera la implementación del programa *Escuelas con emociones* cuyo principal objetivo es fortalecer las **habilidades socioemocionales** de las comunidades educativas en Bogotá para la **promoción de la salud mental** y el mejoramiento **del clima escolar**, el cual se desarrolla por medio de 5 estrategias descritas a continuación.

- **Aulas con emoción** fortalece las habilidades socioemocionales en líderes educativos para mejorar el clima escolar y la salud mental en las instituciones. Sus acciones incluyen la Escuela de liderazgo socioemocional para directivos y orientadores, el fortalecimiento de docentes de primera infancia, la implementación de una malla de aprendizajes socioemocionales y el acompañamiento a situaciones críticas resignificando el conflicto como oportunidad de aprendizaje.
- **Educación integral para la sexualidad (EIS)** fomenta habilidades socioemocionales para el desarrollo de la sexualidad y la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes. Se centra en la implementación de la malla de aprendizajes en el aula, el fortalecimiento de equipos docentes, la participación de las familias y el empoderamiento de NNJ frente a los desafíos propios de su edad.
- **Construcción de ciudadanía** promueve el desarrollo socioemocional de NNJ, familias y comunidades para fortalecer su rol como agentes de cambio. Sus líneas de acción incluyen el uso de la malla de aprendizajes, la participación de NNJ mediante semilleros y gobiernos escolares, la justicia escolar restaurativa en los manuales de convivencia y el apoyo a proyectos de paz, junto con alianzas estratégicas como Guardianes de la constitución, Romper el silencio y Democracia al tablero.
- **Fortalecimiento familiar** busca estrechar la relación entre escuela y familias para garantizar trayectorias educativas y el desarrollo socioemocional. Se promueve a través de Centros de orientación familiar, acompañamiento a las trayectorias educativas, formación en gestión emocional y vínculos afectivos, además de nidos de escucha como redes de apoyo y colaboración.
- **Entornos escolares inspiradores** articula esfuerzos comunitarios, interinstitucionales y del sector privado para generar ambientes protectores que favorezcan el aprendizaje. Sus acciones incluyen la prevención de la violencia y la criminalidad, el mejoramiento del

espacio público con iluminación y mantenimiento, y proyectos comunitarios como recuperación de parques, muralismo y conservación de ecosistemas.

De esta manera, en el marco del programa se busca **prevenir las situaciones de vulneración de derechos y las distintas formas de violencia** que puedan afectar a niñas, niños y jóvenes de la ciudad, así como **promover el ejercicio pleno de sus derechos**. Para ello, se implementan de manera **periódica, constante y articulada** diversas acciones y estrategias orientadas a la **mitigación de factores de riesgo** y a la atención de las **necesidades del territorio**, especialmente frente a las afectaciones emocionales y psicológicas asociadas a la presunta ocurrencia de situaciones de violencia.

En este contexto, la **Secretaría de Educación del Distrito** cuenta con la **Malla de aprendizaje de habilidades socioemocionales**, una herramienta desarrollada por la Secretaría de Educación del Distrito dirigida a las comunidades educativas, los procesos comunitarios y las familias, cuyo propósito es facilitar el abordaje, la comprensión y el fortalecimiento de dichas habilidades en las instituciones educativas y sus entornos, contribuyendo así a una formación integral.

A través de esta herramienta, se promueve el desarrollo de habilidades como el autoconocimiento, la agencia, la empatía, el manejo de conflictos y la toma de decisiones, con base en referentes académicos y soportes metodológicos. En este sentido, la SED consolida su compromiso por desnaturalizar cualquier tipo de violencia presente en el entorno escolar que pueda poner en riesgo la integridad o vulnerar los derechos de niñas, niños y adolescentes, teniendo en cuenta que el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales en las comunidades educativas contribuye a la identificación, el abordaje y la prevención de situaciones de vulneración hacia NNA desde el reconocimiento del otro en su valor y diferencia. Con ello, se promueve la construcción de entornos seguros y protectores que garanticen su desarrollo, bienestar socioemocional, aprendizaje y una convivencia escolar basada en el respeto y la equidad.

Por último y en atención a las presuntas situaciones que se detecten en las instituciones educativas, la SED cuenta con los **Protocolos de atención integral para la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos**, que hacen parte de la Ruta de Atención Integral definida en la Ley 1620 de 2013 y su Decreto reglamentario 1965 del 2013. Estos protocolos se desarrollan y fortalecen mediante del programa **Escuelas con Emociones**. De esta manera, se amplía la cobertura y procesos de abordaje en todas las localidades de la ciudad, teniendo en cuenta las situaciones de presuntas violencias hacia niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Se resalta el **Protocolo de atención para situaciones de presunta agresión y acoso escolar**. Estos protocolos establecen las acciones, pautas y orientaciones que deben seguir las instituciones educativas públicas y privadas del distrito cuando identifiquen o tengan conocimiento de situaciones que afecten la convivencia escolar o vulneren los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las y los estudiantes, con el fin de proteger su integridad y garantizar el restablecimiento de derechos frente a presuntas situaciones que puedan implicar prácticas de discriminación en las comunidades educativas.

Asimismo, dichos protocolos se aplican atendiendo a las necesidades y particularidades de cada caso, desde un **enfoque de diversidad e inclusión**, incorporando factores diferenciales que permitan adecuar los procesos de atención, restablecimiento de derechos y promoción de un clima escolar favorable para el desarrollo y aprendizaje.

Adicionalmente, es importante destacar que, la Secretaría de Educación del Distrito fundamenta su actuar en un análisis de riesgos multidimensional que identifica y aborda las barreras para el aprendizaje y la participación conforme a lo establecido en el Decreto 1421 de 2017 y las Circulares 020 y 021 de 2022. Dicho análisis comprende factores pedagógicos, socioemocionales, familiares, contextuales y de permanencia escolar, con el propósito de anticipar situaciones que puedan comprometer la trayectoria educativa continua, pertinente y con calidad de los estudiantes.

Frente a posibles retrocesos en los aprendizajes, se reitera que la Ruta para el tránsito de los estudiantes de aulas de apoyo a la oferta común/regular se desarrolla mediante cuatro fases. Estas fases aseguran que el tránsito hacia entornos inclusivos no sea una acción discrecional, sino un proceso técnico, gradual, transicional y monitoreado, que previene cualquier afectación en el desarrollo de competencias, ritmos y estilos de aprendizaje.

Con respecto a la “deserción escolar encubierta”, se precisa que, este término no corresponde a una categoría formalmente definida ni utilizada en el marco normativo, estadístico o de seguimiento del sistema educativo en Colombia. Su adopción implicaría el desarrollo previo de estudios técnicos y procesos de investigación educativa que permitan determinar su existencia, caracterización y magnitud, así como la definición de metodologías e instrumentos específicos para su medición y abordaje.

Sin embargo, con el fin de hacer una aproximación y entendida como la permanencia física del estudiante sin participación significativa ni oportunidades efectivas de aprendizaje, la entidad ha robustecido los mecanismos de monitoreo mediante el Sistema integrado de matrícula (SIMAT) y la presencia en territorio de los 1.123 docentes de apoyo pedagógico. Estos profesionales realizan seguimiento al proceso de los estudiantes, acompañan y asesoran a los docentes de aula y aportes a los ajustes razonables, garantizando que cada niño, niña o adolescente reciba los ajustes razonables y apoyos necesarios para su participación plena, activa y segura dentro del entorno escolar. De este modo, se asegura que no existan estudiantes “invisibilizados”, “segregados” o sin garantías para su progreso educativo.

Adicionalmente, la SED adelanta de manera permanente acciones orientadas a la prevención del abandono escolar y a la identificación oportuna de situaciones de riesgo asociadas a la inasistencia reiterada, la desvinculación progresiva y el bajo rendimiento académico. Estas acciones se desarrollan principalmente a través del seguimiento institucional que realizan los establecimientos educativos, el rol pedagógico y de acompañamiento de los docentes, y el monitoreo de los procesos de participación, permanencia y desempeño académico de los y las estudiantes, en articulación con las estrategias distritales de acceso y permanencia escolar.

En ese marco, se desarrollan los siguientes mecanismos de seguimiento, depuración y análisis que permiten la detección temprana de riesgos y la focalización de acciones de permanencia:

- Diseño del índice de riesgo escolar: esta es una herramienta preventiva que incorpora factores socioeconómicos y demográficos, con el propósito de crear un índice de categorización de estudiantes en función de su grado de riesgo de abandono escolar. Esto facilita la segmentación de estrategias para una intervención adecuada con la población con alto riesgo de desescolarización o abandono escolar.
- Elaboración del cálculo de la tasa de deserción inter - anual: en aras de conocer la proporción de estudiantes que abandonan el sistema educativo, la Secretaría de Educación del Distrito construyó la tasa de deserción inter - anual, la cual ha permitido identificar los estudiantes matriculados que por diferentes factores abandonan sus estudios al finalizar el año y comenzar el siguiente. Este indicador complementa el oficializado por el Ministerio de Educación Nacional (deserción intra-anual) identificando aquellos estudiantes que desertan al terminar el año escolar.
- Observatorio de acceso y permanencia escolar (OAPE): con el objetivo de tener un mayor nivel de comprensión local y Distrital sobre los diferentes factores asociados al acceso y la permanencia escolar, la SED creó el OAPE, el cual se establece como un espacio de información abierto en la web, el cual recopila, interpreta, analiza y divulga información sobre el acceso y la permanencia escolar y que permite a los ciudadanos interactuar y conocer información, políticas, planes y programas y sus impactos para mitigar esta problemática.
- Seguimiento “niño a niño” y por institución educativa a través del Sistema de información para el monitoreo, la prevención y el análisis de la deserción escolar: Proceso a través del cual se adelanta el seguimiento por estudiante y por IED a través del SIMPADE, el cual es un sistema administrado por el Ministerio de Educación Nacional – MEN. Dicho sistema permite realizar monitoreo a las condiciones de permanencia/deserción de cada estudiante; permitiendo focalizar acciones con la población que requiere mayor apoyo institucional, realizar seguimiento de la deserción en los establecimientos educativos y sus causas (institucionales, familiares, de contexto, individuales) y facilita el diseño planeado y la implementación de estrategias para garantizar la permanencia escolar.
- Proceso de verificación de la matrícula escolar: el proceso de verificación de la matrícula escolar consiste en realizar la verificación, validación, depuración y actualización de la información reportada en el Sistema integrado de matrícula (SIMAT) por las instituciones educativas distritales (IED), con el fin de garantizar la oportunidad, veracidad y calidad de la información registrada.
- Procedimiento de validación de los registros del SIMAT: corresponde al conjunto de controles técnicos y administrativos orientados a garantizar la consistencia, integridad y calidad de la información de los estudiantes matriculados en el Sistema Integrado de Matrícula. Este procedimiento incluye, entre otros aspectos, la validación de números PER\_ID duplicados, documentos de identidad duplicados, coincidencias en nombres, apellidos y fechas de nacimiento, así como el cálculo y verificación de la edad del estudiante. Adicionalmente, contempla la actualización y validación de la información de acudientes y padres, la coherencia entre edad y grado, la validación del tipo de documento, el ascenso de grado, la clasificación por edad y grado, y la validación del Sistema de



responsabilidad penal para adolescentes (SRPA) en estudiantes menores de 14 años. En conjunto, estas validaciones permiten asegurar registros confiables y oportunos para la adecuada gestión de la matrícula y el seguimiento a las trayectorias educativas.

- Modernización del proceso de matrícula: en el marco de la gestión de la cobertura educativa, la Secretaría de Educación del Distrito fortaleció los procesos de matrícula con el fin de garantizar el acceso, la permanencia y la atención oportuna de niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo oficial. Para ello, implementó y modernizó herramientas digitales mediante el desarrollo de formularios de inscripción, asignación directa, pre - matrícula y oferta en plataformas tecnológicas (Angular, APEX y Microsoft Fabric), lo que permitió automatizar procesos, mejorar la trazabilidad de la información, optimizar la atención a las familias y asegurar una asignación más ágil y oportuna de cupos para el inicio del calendario escolar.

Es importante señalar que, las acciones anteriormente descritas han contribuido de manera significativa a la mejora de los indicadores de eficiencia interna del Distrito, en particular el de deserción escolar. Para el año 2024 (última tasa oficial disponible), Bogotá registró una reducción en la tasa de deserción, pasando del 2,84% en 2023 al 2,50%, lo que representa una disminución de 0,34 puntos porcentuales (pp) y posiciona a la ciudad entre las entidades territoriales con mejores resultados en términos de permanencia educativa a nivel nacional.

Adicionalmente, la tasa de deserción del Distrito<sup>3</sup> se ubicó 1,13 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional, que fue del 3,63%, lo cual evidencia avances sostenidos en materia de retención y continuidad escolar. Asimismo, para el año 2025, la tasa promedio de asistencia escolar se mantuvo en 96,73%, reflejando la continuidad de las políticas de cobertura, la efectividad de los mecanismos de seguimiento y las estrategias de permanencia escolar orientadas a mitigar el fenómeno de la deserción escolar.

Por otro lado, en relación con la prevención del fracaso escolar en estudiantes con mayores necesidades de apoyo, la Secretaría fortalece la implementación del Diseño universal para el aprendizaje (DUA), la flexibilización curricular y la estructuración de Planes individuales de ajustes razonables, garantizando que las metas de aprendizaje sean pertinentes, alcanzables y ajustadas a las capacidades, ritmos y trayectorias de cada estudiante.

Respecto a las afectaciones emocionales y psicológicas que puedan derivarse de las transiciones educativas, la Secretaría activa de manera inmediata los protocolos de orientación escolar. En este marco, se promueven procesos socioemocionales. Estas acciones permiten que el estudiante transite mediante un entorno de seguro.

Finalmente, la protección contra la discriminación en aulas regulares se garantiza mediante la transformación estructural de las culturas escolares a través de los Planes de Mejoramiento Institucional (PMI), los procesos de formación docente y las acciones de sensibilización dirigidas a toda la comunidad educativa. Adicionalmente, las instituciones deben asegurar que los manuales de convivencia estén plenamente armonizados con los principios de educación inclusiva y con los estándares internacionales de derechos humanos. Con ello, se garantiza que

---

<sup>3</sup> Fuente oficial (reporte SED/MEN)



el aula sea un espacio de acogida donde la diversidad es reconocida como un valor pedagógico, constitucional y socialmente protegido, y no como un factor de exclusión o estigmatización.

## **VIII. Participación de Familias y Comunidad Educativa**

**37. ¿Cómo fueron vinculadas las familias en la toma de la decisión?**

**38. ¿Qué mecanismos de participación real se garantizan a las familias?**

**39. ¿Qué canales de queja y protección de derechos se habilitan?**

**40. ¿Qué dependencia asume la responsabilidad por eventuales vulneraciones al Derecho Fundamental a la Educación Efectiva?**

*Por unidad de materia, se presenta la respuesta a los numerales 37, 38, 39 y 40:*

Tal como se ha señalado en puntos anteriores, la Secretaría de Educación del Distrito está implementando una ruta de acompañamiento al tránsito, lo cual supone llevar a cabo un cambio gradual hacia un modelo educativo inclusivo.

En este proceso, desde la fase 2 a la 4, involucra el diálogo con las familias, como actores fundamentales en este ejercicio, tanto en la caracterización de cada estudiante, como en el reconocimiento de las decisiones pedagógicas que se orientan a partir del resultado de la valoración pedagógica.

La articulación entre la escuela y la familia se establece como un elemento clave. Según el Decreto 0459 de 2024, se regula la participación de las familias en las instituciones educativas, mientras que el Decreto 1421 define sus obligaciones en el marco de un proceso de corresponsabilidad. Esto implica que tanto la familia como la escuela deben colaborar en la creación de un entorno que favorezca el aprendizaje y la inclusión. Para ello, se promueven encuentros regulares que faciliten el reconocimiento mutuo entre docentes y familias, creando un espacio de confianza donde se puedan compartir experiencias y expectativas sobre el proceso educativo.

Además, es crucial garantizar la representación de las familias en los espacios de construcción de políticas institucionales, como el Proyecto educativo institucional (PEI), el manual de convivencia y el Sistema de información de la educación especial (SIEE). Esta permite que las voces de las familias se escuchen y se integren en la toma de decisiones, asegurando que las políticas reflejen realmente las necesidades y aspiraciones de la comunidad.

En términos de prácticas educativas, es necesario que las familias estén informadas sobre el horizonte pedagógico definido por la escuela, incluyendo el sistema de apoyos y las estrategias que buscan favorecer el aprendizaje de sus hijos. Esto se logra a través de procesos de formación y acompañamiento que proporcionen herramientas y canales de comunicación efectivos, generando confianza en el proceso educativo y, por ende, un mayor compromiso por parte de las familias.

La participación de las organizaciones sociales y comunitarias también es esencial. Estas entidades pueden contribuir al fortalecimiento de los procesos de educación inclusiva mediante la promoción de actividades culturales, deportivas y de emprendimiento que integren a la comunidad en la vida escolar. La colaboración con asociaciones vecinales, comerciantes y otros grupos comunitarios puede facilitar la creación de un ambiente que valore la diversidad y fomente la equidad.

Asimismo, la conformación de redes educativas y comunitarias es fundamental para ampliar las oportunidades de interacción y apoyo. Estas redes pueden incluir organizaciones que trabajan en áreas como salud, cultura y bienestar social, permitiendo un enfoque integral que responda a las diversas necesidades de los estudiantes con discapacidad. La participación en estas redes no solo fortalece el compromiso de las familias y la comunidad, sino que también enriquece las prácticas educativas al incorporar diferentes perspectivas y recursos.

Es vital promover una cultura de inclusión y equidad que trascienda las fronteras de la escuela. Esto implica fomentar un diálogo continuo y constructivo entre todos los actores involucrados, donde se compartan valores y se construyan juntos los principios que guiarán la educación inclusiva. Al hacerlo, se logra no solo una mejora en las trayectorias educativas de los estudiantes con discapacidad, sino también el fortalecimiento de una comunidad que valora y celebra la diversidad.

En resumen, fortalecer la participación de las familias, organizaciones sociales y estudiantes con discapacidad en la construcción de políticas educativas inclusivas requiere un enfoque colaborativo y corresponsable, donde cada actor asuma un papel activo y significativo en el proceso educativo. Esto no solo beneficia a los estudiantes, sino que también enriquece a toda la comunidad educativa.

Aunado a lo anterior, la Secretaría de Educación del Distrito ha atendido en los diferentes espacios de entes de control y de control político, en los que han participado y se les ha dado la voz a las familias, brindando una respuesta en el marco del proceso y lo que se ha detallado anteriormente. Asimismo, se ha brindado respuesta a los diferentes requerimientos expuestos por las familias, así como los interpuestos por vía de acción de tutela, en los que se ha detallado el alcance, el propósito, la argumentación técnica y jurídica y el proceso a adelantar.

De igual forma, se realizan acciones con el fin de:

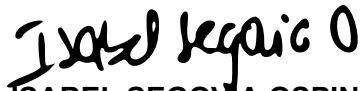
- a) Garantizar la restitución de los derechos de los estudiantes con discapacidad.
- b) Identificar las principales barreras de acceso a derechos que enfrentan los y las estudiantes con discapacidad y adelantar gestiones para su progresiva eliminación.
- c) Conocer, investigar y resolver situaciones de hostigamiento, discriminación y violencia contra estudiantes con discapacidad.
- d) Implementar acciones pedagógicas y comunicacionales orientadas a avanzar en los procesos de reconocimiento, valoración, inclusión y cuidado de estudiantes con discapacidad, así como sensibilizar a la comunidad educativa en general respecto a la condición y a la situación de Discapacidad; así como a la no discriminación de las personas con o en situación de discapacidad.

- e) Articular con la Escuela de Padres, Madres y Personas Cuidadoras, lo relacionado con los contenidos relevantes para el logro de un entorno educativo inclusivo y respetuoso de estudiantes con discapacidad.

Finalmente, la Secretaría de Educación del Distrito reafirma su compromiso con la garantía de derechos de los estudiantes con discapacidad y reitera su disposición para continuar generando acciones que fortalezcan y promuevan una educación verdaderamente inclusiva.

Esperamos que la información suministrada atienda lo solicitado.

Cordialmente,



**ISABEL SEGOVIA OSPINA**

Secretaria de Educación del Distrito

Aprobaciones a través de correo electrónico institucional:

Aprobó: Abel Matiz Salazar, Subsecretario de Acceso y Permanencia.  
Julia María Rubiano de la Cruz, Subsecretaria de Calidad y Pertinencia.  
Carlos Arturo Charria Hernández, Subsecretario de Gestión Institucional.  
Edwin Alberto Ussa Cristiano, Jefe Oficina para la Convivencia Escolar.

Revisó: Patricia Camacho Álvarez, Contratista Despacho SED.  
Laura León León, Asesora Despacho SED.  
Laura Juliana Páramo Pérez, Contratista Despacho SED.